

concordatario afecta al orden público e impide que una eventual sentencia canónica que declare de nulidad de ese matrimonio sea reconocida civilmente en Italia.

Una consideración detenida y global de la obra permite advertir el interés y la calidad de los trabajos que la integran, y señalar que, más allá de su finalidad inmediata de ofrecer el punto de vista de un grupo de juristas a los Padres sinodales, a los que se dedica el volumen, permanece su valor como destacada contribución al debate de las ideas sobre los principales retos que tiene planteados el matrimonio y la familia en la actualidad. Así que sólo me queda felicitar a los autores y, de modo particular, a las también editoras, las profesoras Fumagalli y Sammassimo.

Javier FERRER ORTIZ

María del Carmen GARCIMARTÍN MONTERO (ed.), *La financiación de la libertad religiosa. Actas del VIII Simposio Internacional de Derecho Concordatario*, Comares, Granada 2017, 489 pp., ISBN 978-84-9045-598-2

En el ámbito del derecho canónico y del derecho eclesiástico del Estado hay una serie de reuniones académicas ya muy consolidadas en España. Sobre todo, las Jornadas de la Asociación Española de Canonistas, que reúne a sus miembros anualmente durante la Semana de Pascua en Madrid, y las que en el mes de noviembre tienen lugar en la Universidad de Navarra, alternando cada año entre el Curso de Actualización en Derecho Canónico y el Simposio Internacional del Instituto Martín de Azpilcueta (hay, por supuesto, otras varias iniciativas relacionadas con estas áreas científicas, si bien suelen ser reuniones más breves o sin una cadencia predeterminada). Desde hace quince años se celebran también bienalmente los Simposios Internacionales de Derecho Concordatario, organizados por las Universidades de Almería, Alcalá e Internacional de La Rioja, que han logrado un espacio propio en nuestro panorama académico, por calidad científica y excelencia organizativa. En junio de 2017 tuvo lugar la octava edición de esta serie de simposios y a fines de año vieron la luz sus actas, de las que se da noticia seguidamente.

La financiación de la libertad religiosa no es un título inédito en la literatura española de derecho eclesiástico ni responde con mucha precisión al conte-

nido del volumen, pero me parece apropiado para una obra de esta naturaleza, que pretende agrupar un variado conjunto de colaboraciones relacionadas con las confesiones religiosas y la temática económica. Ciertamente, se trata de una fórmula hiperbólica, que toma la parte por el todo, pues la libertad religiosa no es propiamente objeto de “financiación”, como si de uno de los derechos sociales se tratara. Muchas de las manifestaciones del derecho de libertad religiosa, en efecto, no tienen una dimensión prestacional. Es más –como hace notar Alfredo García Gárate en su brillante contribución *Aproximación al contenido esencial de la libertad religiosa*–, la financiación de ciertas manifestaciones de religiosidad, cuando procede, descansa sobre el principio de cooperación y no propiamente sobre la libertad religiosa.

Esta última reflexión nos pone sobre la pista de lo que, a mi parecer, se presenta como objeto principal de estudio en este volumen, a saber, la dimensión institucional de la libertad religiosa, terreno en el que está llamado a desarrollarse el fenómeno de la colaboración económica de los poderes públicos con las confesiones. Me parece una perspectiva muy acertada y necesitada de atención, por cuanto se trata de la faceta menos atendida por parte de la legislación –y de la cultura jurídica contemporánea en general–, en la que prima la concepción individualista de los derechos. Sobre la base institucional del fenómeno religioso se apoya precisamente –como no podría ser de otro modo– el derecho concordatario y también las otras manifestaciones de negociación y consenso entre el Estado y las confesiones religiosas distintas de la Iglesia católica.

El volumen reúne veintinueve contribuciones: trece ponencias y dieciséis comunicaciones. Entre los ponentes hay un británico, un francés y un italiano, lo que ratifica la internacionalidad del evento. El conjunto de la obra ofrece un texto sumamente sólido y actualizado, de utilidad evidente para cualquier especialista en la materia.

La programación de las ponencias se realiza, por supuesto, con una pretensión sistemática que resulta sumamente razonable. Hay dos ponencias de carácter más general, que se ocupan de la perspectiva europea. La primera a cargo de Ronan McCrea, sobre *La financiación de las confesiones religiosas en Europa*, y la segunda de Gérard Gonzalez, sobre *La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre financiación de las confesiones religiosas*.

McCrea ofrece una visión de conjunto –como cabía esperar por el tema confiado– y, quizá por la generalidad del enfoque, no he acabado de comprender la posición del autor acerca de lo que denomina la “financiación indi-

recta” de las confesiones religiosas, categoría en la que parece incluir las ayudas públicas a entidades sanitarias y educativas de inspiración religiosa. A mi modo de ver, estas últimas no son actividades religiosas sino seculares y el título que justifica la contribución del Estado no es la religión sino el interés general. Otra cosa es que quienes desempeñan esos servicios cuenten con una inspiración religiosa, que, por otra parte, viene demandada libremente por los usuarios.

La asignación tributaria en Italia es analizada por Vincenzo Pacillo. También desde perspectiva comparatista se alude a *La financiación de la Iglesia católica en los concordatos de la Europa del Este*, tema que desarrolla Aurora María López Medina. La afinidad entre los sistemas de cooperación económica del Estado con la Iglesia católica en los países mencionados y el sistema español resulta muy clara. Italia introdujo en 1984 el modelo español de asignación tributaria “corregido y aumentado”, con acierto notable, al menos desde el punto de vista de la eficiencia económica; los países concordatarios del Este de Europa, por su parte, han intentado servirse de lo aprovechable del modelo, en la medida en que resulta compatible con su propio ordenamiento jurídico.

Pacillo se muestra abiertamente crítico con el modelo italiano, sin importarle revisar posiciones anteriores, en las que se había manifestado más o menos a favor del sistema. Hoy manifiesta dudas acerca de su compatibilidad con el carácter laico del Estado y piensa que es contrario al pluralismo, porque todas las creencias reconocidas como tales deberían estar en condiciones de recibir fondos públicos. Concluye su exposición con unas consideraciones sobre la “teología de la pobreza”, inspirada en el magisterio del papa Francisco, mediante las que pasa del neutral análisis jurídico de un ordenamiento secular a hacer propuestas *de iure condendo* –la superación del modelo de asignación tributaria– desde una particular comprensión de la Iglesia.

Otras dos ponencias versan sobre el aspecto más característico del régimen jurídico relativo a la materia económica de la Iglesia católica en España, que es el sistema de asignación tributaria, analizado desde perspectivas diversas por Fernando Giménez Barriocanal (*Una exposición de la financiación del 0,7 IRPF desde la perspectiva de la Iglesia*) y por Juan Ferreiro Galguera (*El sistema actual de financiación de la Iglesia católica a través del IRPF*). En estos casos –como también en los mencionados de derecho comparado– sí que nos encontramos ante una temática de “derecho concordatario puro”, si se permite la expresión,

sin desconocer que otros aspectos, regulados por disposiciones legislativas o reglamentarias del Estado, puedan resultar vinculados a lo que suele llamarse “el conjunto o el complejo concordatario”.

Se aborda ampliamente, asimismo, lo relativo al régimen fiscal de las confesiones religiosas, utilizando como criterio de distinción la naturaleza estatal o local de los impuestos (Rosa María Ramírez Navalón, *Exenciones fiscales en los impuestos estatales* y Miguel Ángel Asensio Sánchez, *Exenciones fiscales en la tributación local*).

El importante aspecto del mecenazgo es tratado por Silvia Meseguer Velasco, en el contexto de lo que suele denominarse la “autofinanciación” de las confesiones religiosas. Sea cual fuere el significado de ese término –no propiamente jurídico y que, por cierto, no aparece en los textos de los acuerdos con las confesiones religiosas–, el avance efectivo en esa dirección requeriría un potente estímulo legal al régimen de ayudas dispensadas por los particulares a las actividades religiosas. De lo contrario, hablar de autofinanciación de las confesiones es música celestial.

Diego Zalbidea trata acerca de *Las otras financiaciones (profesores, asistencia religiosa, acción social)*. El autor hace notar que el título le vino dado y no es fruto de su elección... Hace bien en advertirlo porque resulta extremadamente confuso; como si la justa retribución a unas personas por la prestación de un servicio, por más que sea de índole religiosa, hubiera de contabilizarse en el haber de las confesiones. El Prof. Zalbidea sortea, por supuesto, cualquier planteamiento que pudiera conducir a una interpretación de ese estilo.

Queda por mencionar una ponencia no ya ajena al derecho concordatario sino que podríamos calificar como propiamente “anticoncordataria”. Me refiero a la que desarrolla el Prof. Mantecón: *Financiación de la Iglesia católica en caso de denuncia del Acuerdo sobre Asuntos Económicos*. Es un ejercicio de ciencia jurídica-ficción –no una propuesta de *iure condendo*–, que espero no llegue a realizarse. Los acuerdos vigentes entre el Estado Español y la Santa Sede son norma de derecho internacional y hay que presumir que las Altas Partes pertenecen a la categoría de sujetos de la comunidad internacional que respetan los compromisos asumidos.

En relación precisamente con la vigencia de los Acuerdos España-Santa Sede se encuentra la aportación de Francisco Vázquez, exalcalde de La Coruña –sede del Simposio–, y exembajador del España ante la Santa Sede, que pretende hacer “una defensa argumentada” de esos pactos internacionales.

Deduzco –por la relevancia pública del conferenciante y porque en realidad el tema se sale de la específica materia económica– que esa intervención constituyó la ponencia de clausura. Si efectivamente fue así, el Simposio encontró un brillante final.

La sección de comunicaciones reúne asimismo textos de elevado interés. La congruencia sistemática es menos exigible en este caso, si bien presentan un conjunto bastante homogéneo en conexión con la temática económica. La excepción podría ser la ya mencionada contribución de Alfredo García Gárate sobre el contenido esencial de la libertad religiosa, que justifica perfectamente su presencia en este volumen por el carácter fundamental del objeto.

Enriquecen la perspectiva del derecho comparado las comunicaciones de Antonio Quirós Fons (*La financiación de la Iglesia católica en Croacia*) y de Marta Tígano, si bien, en este caso, referido a un aspecto concreto y muy característico del derecho eclesiástico italiano (*Brevi note su [libertà religiosa e] finanziamento degli edifici di culto in Italia*). El mecenazgo encuentra atención por parte de Santiago Álvarez García (*La promoción de la financiación privada de la libertad religiosa en el marco de los incentivos fiscales al mecenazgo*) y Juan González Ayesta desarrolla un aspecto aludido brevemente por Fernando Giménez Barriocanal en su ponencia (*Anotaciones sobre el convenio de colaboración en materia de transparencia suscrito entre la Conferencia Episcopal española y Transparencia Internacional España*).

En materia fiscal, María Cebriá y Enrique Herrera inciden sobre el ICIO, “impuesto estrella” en los momentos que corren merced a la conocida sentencia del Tribunal de Luxemburgo de 27 de junio de 2017. La autora primeramente mencionada incide ampliamente, en su valiosa contribución, en el Derecho comunitario. Jorge Subirán se ocupa del IBI, otro de los impuestos cuya aplicación a las confesiones religiosas concita de manera especial la atención de la doctrina y de la opinión pública. Sol González Seoane explora la posibilidad de que determinadas actividades docentes de las entidades religiosas puedan generar derecho a la exención de impuestos.

En torno a enseñanza se agrupan cuatro comunicaciones más. Algunas se interesan por los aspectos generales de la financiación de la enseñanza, como la de Jaume Codina Esmet (*La libertad religiosa: ¿se financia realmente en la enseñanza secundaria?*), y la de Blanca Vintanel Lucientes (*La financiación de la enseñanza escolar en los debates parlamentarios de las leyes orgánicas de educación*); otras se centran en la problemática específica de la enseñanza religiosa escolar, como la de Enrique Marcos Pascual, sobre *La financiación de la enseñanza*

de la religión católica en los centros docentes públicos y el derecho a elegir de los padres de acuerdo con sus propias convicciones religiosas y filosóficas y la de María Belén Rodrigo Lara (*La financiación de la enseñanza de las religiones en la escuela pública: los profesores de religión, el pago de sus salarios y la neutralidad del Estado*). La interesante contribución de Juan Luis Sevilla Bujalance (*Patria potestad, libertad de educación y alternativas al sistema educativo español*), guarda menos relación con la cuestión económica.

Reservo para el final la referencia a dos textos que centrar su atención sobre Cáritas, una entidad religiosa de particular interés desde la perspectiva jurídica. Ángel López-Sidro y Francisca Pérez-Madrid coinciden en elegir esta institución canónica como objeto de estudio, principalmente en su vertiente de entidad social que concurre junto con otras en la percepción de fondos públicos. *Cáritas y la financiación de los fines de interés social* es el título de la aportación de López-Sidro; y *La fiscalización de los fondos públicos destinados a entidades religiosas: el supuesto de Cáritas*, el de la comunicación de Pérez-Madrid.

Este volumen de estudios que ofrece un resultado tan positivo debe mucho, naturalmente, al buen hacer y al rigor científico de quien lo ha ideado y coordinado, la profesora Carmen Garcimartín, de la Universidad de La Coruña, a quien no puedo dejar de mencionar con sincero reconocimiento al cerrar estas líneas.

Jorge OTADUY

José María MARTÍ SÁNCHEZ – María del Mar MORENO MOZOS (eds.),
La autonomía de las entidades religiosas en el derecho. Modelos de relación y otras cuestiones, Dykinson, Madrid 2017, 219 pp., ISBN 978-84-9148-149-2

En el año 2002, el Tribunal Constitucional, con ocasión de su sentencia número 154 de 18 de julio, ya tuvo ocasión de señalar que «la aparición de conflictos jurídicos por razón de las creencias religiosas no puede extrañar en una sociedad que proclama la libertad de creencias y de culto de los individuos y comunidades así como la laicidad y neutralidad del Estado». Uno de los conflictos que ha ido adquiriendo mayor importancia con el paso del tiempo y con ocasión de la aparición de nuevos fenómenos religiosos de carácter colectivo,